



RECOMENDACIÓN DIRIXIDA AO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE BOIRO (A CORUÑA), PARA QUE PROCEDA A BORRAR E SUPRIMIR DATOS PERSOAIS INNECESARIOS DE CONVOCATORIAS DE AXUDAS PÚBLICAS AO TRANSPORTE

Expediente: R.5.Q/18666/18

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2018

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito dun cidadán que denuncia que desde hai dous anos o sitio web dese concello mantén publicada unha listaxe de beneficiarios de axuda ao transporte que podería estar a vulnerar a normativa de protección de datos.

ANTECEDENTES

A persoa promotora da queixa explica no seu escrito que desde hai dous anos a páxina web dese concello (www.boiro.gal) mantén visibles as listaxes de persoas beneficiarias e rexeitadas nunha convocatoria de axudas públicas ao transporte, na que os nomes completos das persoas (nome e dous apelidos) aparecen acompañados do seu enderezo postal completo e, de ser o caso, das contías concedidas. A persoa que presenta a queixa aparece nesta listaxe que está a disposición pública no enderezo:

<http://boiro.gal/attachments/article/894/Relacion%20de%20beneficiarios%20das%20axudas.pdf>

Ante iso requirimos informe a ese Concello de Boiro o pasado 2 de outubro de 2018. De xeito paralelo, a institución do Valedor do Pobo dirixiuse á directora da Agencia Española de Protección de Datos para que, en aras á colaboración, no marco das súas competencias, nos

achegara información sobre a situación denunciada polo particular e nos detallase se emprendera acción algunha en relación con estes feitos ou se tiña previsto iniciar actuacións. Como engadidura solicitóuselle á Axencia que facilitase información sobre os mecanismos para a protección de datos deste particular e doutras persoas que se puideron ver afectadas por esta situación, dentro do novo marco normativo da protección de datos.

Transcorrido un mes da solicitude de información a ese concello, a institución do Valedor do Pobo non rexistrou información algunha relacionada coa queixa. Si que se recibiu, pola contra, oficio emitido pola Agencia Española de Protección de Datos no que se especifica literalmente:

“Se ha recibido, con fecha de registro de salida 3 de octubre de 2018 y número 12418/18, escrito de la Valedora do Pobo de Galicia dando traslado de la queja formulada ante esa institución por -----, en la que expone que la página web de su Ayuntamiento (Concello de Boiro, provincia de A Coruña) mantiene publicado desde hace dos años un listado de personas beneficiarias y no beneficiarias de unas ayudas al transporte con sus nombres completos y direcciones postales, acompañados de la cuantía de la ayuda concedida, solicitando la colaboración de esta Agencia para facilitar información sobre los referidos hechos y, en su caso, sí se ha emprendido algún tipo de actuación o hay previsión de hacerlo sobre los mismos, ha de manifestarse lo siguiente:

En primer término, ha de informarse que no hay registrada en la base de datos de esta Agencia ninguna reclamación por parte de-----.

Por lo que se refiere a los criterios en relación con los hechos que se mencionan en el escrito de la Valedora do Pobo de Galicia, desde la perspectiva de las atribuciones de esta Agencia, ha de señalarse que, conforme a la normativa reguladora en materia de subvenciones, la concesión de ayudas o subvenciones debe sujetarse a los principios de publicidad, transparencia y concurrencia, y, por tanto, deben ser objeto de publicación los datos personales de los beneficiarios, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de las ayudas.

Ahora bien, en el caso de las personas físicas, en virtud del principio de minimización, deben ser objeto de publicación los datos personales mínimos imprescindibles para cumplir la finalidad buscada por la norma, que en el presente caso si ceñiría, junto con la cantidad concedida y la puntuación final obtenida, al nombre y apellidos y a las cuatro últimas cifras del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente, tal como dispone la Disposición Adicional Séptima del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, actualmente en tramitación en fase de Comisión ante las Cortes Generales. En concreto, establece dicha Disposición Adicional lo siguiente:

"Identificación de los interesados en las notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos.

1. Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales del afectado, se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte el documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados estas cifras aleatorias deberán alternarse.

Cuando se trate de la notificación por medio de anuncios, particularmente en los supuestos a los que se refiere el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se identificará al afectado exclusivamente mediante el número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte el documento equivalente.

Cuando el afectado careciera de cualquiera de los documentos mencionados en los de los párrafos anteriores, se identificará al afectado únicamente mediante su nombre y apellidos. En ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

2. A fin de prevenir riesgos para víctimas de violencia de género, el Gobierno impulsará la elaboración de un protocolo de colaboración que defina procedimientos seguros de publicación y notificación de actos administrativos, con la participación de los órganos con competencia en la materia".

En estos mismos términos, especialmente en relación con el acceso a determinadas categorías especiales de datos, como por ejemplo los relativos a la discapacidad o a las víctimas de violencia de género, el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que "Sí el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. Adicionalmente y de manera facultativa, las Administraciones podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión que no excluirán la obligación de publicar en el correspondiente Diario oficial".

En el caso de que alguno de los afectados precisara de una mayor información sobre las actuaciones seguidas por el órgano competente para la gestión de las referidas ayudas, por ejemplo a efectos de plantear un eventual recurso contra las mismas, podrá obtenerla desde su condición de interesado en el expediente en cuestión, en virtud de la cual "tendrán" derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos" (artículo 53.1, letra a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Finalmente, respecto al plazo para la conservación de dicha información de carácter personal en las páginas web institucionales o en otros medios de comunicación electrónicos, ésta deberá mantenerse el tiempo que establezca la ley, lo en su defecto, como sucede en el presente caso, el imprescindible para cumplir con la finalidad de la publicación. En consecuencia, cuando finalice el plazo de reclamación o de interposición de los correspondientes recursos, los datos de carácter personal publicados deberán ser borrados del sitio web institucional susceptible de consulta a través de Internet, procediéndose a la supresión de los mismos. Ello al margen del ejercicio por los afectados de los correspondientes derechos de supresión u oposición”.

A información aportada é suficiente para proceder á análise e resolución do presente expediente de queixa.

ANÁLISE

Á vista do contido do escrito de queixa, da documentación achegada pola persoa que promoveu este expediente e do que se manifesta no informe da Agencia Española de Protección de Datos, cómpre destacar que se ben o Concello de Boiro, coa publicación dos nomes e apelidos das persoas admitidas e excluídas dunha convocatoria de axudas públicas ao transporte, pretendeu cumprir coa normativa reguladora en materia de subvencións e atender aos principios de publicidade, transparencia e concorrencia, puido excederse coa aportación de datos.

Como indica a Agencia de Protección de Datos que neste tipo de resolucións deben aparecer datos persoais das persoas beneficiarias, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades das axudas. Pero como especifica o informe, no caso das persoas físicas prima o principio de “minimización” que impón que se publiquen os datos persoais mínimos imprescindibles para cumprir coa finalidade buscada pola norma. No presente caso, indica a directora da Agencia Española de Protección de Datos, *“se ceñiría, junto con la cantidad concedida y la puntuación final obtenida, al nombre y apellidos y a las cuatro últimas cifras del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente”*, tal e como dispón a Disposición Adicional Sétima do Proxecto de Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais, actualmente en tramitación en fase de Comisión ante as Cortes Generales.

No caso que nos trae, aparecen nomes e dous apelidos e a contía, xunto co enderezo postal das persoas beneficiarias, resultando ese dato de enderezo innecesario para a finalidade das axudas. Ademais aparece ese dato de enderezo postal acompañando tamén aos nomes e apelidos dalgúns persoas para as que foron denegadas as axudas.

En canto o tempo que debe conservarse a información de carácter persoal que responde á necesaria publicidade de subvencións e axudas públicas, a Agencia Española de Protección de Datos especifica que debe manterse o tempo que estableza a lei ou, no seu defecto, como sucede neste caso, “*el imprescindible para cumplir con la finalidad de la publicación*”. Enténdese por tanto que os datos de carácter persoal deben ser borrados do sitio web susceptible de consulta a través de Internet, suprimíndose os mesmos, cando finalice o prazo de reclamación ou de interposición dos correspondentes recursos.

CONCLUSIÓN

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar ao Concello de Boiro a seguinte **recomendación**:

Que unha vez transcorridos os prazos de reclamación ou de interposición de recursos, tanto na convocatoria de axudas ao transporte para o curso 2016/2017 e noutras anteriores que estean publicadas na Internet, proceda a borrar e suprimir os datos persoais publicados e elimine das listas públicas de axudas e subvenciones os enderezos postais, innecesarios para a finalidade da concesión, moito máis cando a resolución é denegatoria.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta Institución da aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle efectividade, tamén se é o caso.

Ademais, facémolle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluírase na páxina web da institución.

Debo lembrarlle tamén que, ao abeiro da lei reguladora desta institución, o seu artigo 33 prevé que, se formuladas as súas recomendacións, non obtivese resposta ou, nun prazo razoable, non se producise unha medida adecuada ao suxerido, o Valedor do Pobo poderá poñer os antecedentes do escrito e as recomendacións efectuadas en coñecemento do conselleiro do departamento afectado ou da máxima autoridade da Administración Pública galega.

Se tampouco obtivese unha xustificación adecuada, incluírá tal asunto no seu informe anual ou especial con mención dos nomes das autoridades ou funcionarios que persistan naquela

actitude, especialmente nos casos en que, considerando o Valedor do Pobo que era posible unha solución positiva, esta non se conseguise.

O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei 6/1984, cando prevé que o Valedor do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de Galicia, dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas e as súas causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con especificación das suxestións ou recomendacións admitidas pola administración pública galega.

Saúdoo atentamente.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo